A

propósito de las pasadas elecciones en las que el país eligió el nuevo Congreso y reeligió al Presidente de la República, donde el protagonismo se lo llevaron claramente el abstencionismo y las insinuaciones de diversos partidos sobre posible fraude electoral, es pertinente plantearse una crítica sobre la manera como se desarrollan los procesos democráticos en la actualidad y su relación con el electorado, pero sobre todo hacia los mecanismos que se han establecido para mitigar ese riesgo.

Fue evidente para el país que nuestro proceso de votación no solo sigue siendo arcaico en su relación de costo beneficio cuando se entran a considerar de una parte el alto costo que representan las elecciones para el estado en términos financieros, y además se incluye el elevado costo ambiental de votar en tarjetones, y el costo operativo y logístico de la fuerza pública y las veedurías ciudadanas para velar por que el proceso determinado en esta empresa llamada Colombia no se vea alterado.

En pleno siglo XXI, caracterizado por la rápida evolución de la tecnología, Colombia sigue siendo uno de los únicos países de la región que aún sigue votando en papel, y no obstante los costos ya mencionados y el riesgo existente, no contamos con controles manuales que garanticen mínimamente la integridad de la información electoral. Esto por ejemplo se evidenció con el inadecuado control de tarjetones pues en caso de “equivocarse” un votante podía pedir más de uno; si a eso le suma que no se deja evidencia física del votante como la huella en papel o digital, nos permite preguntarnos ¿Qué garantías tenemos los colombianos de que los resultados corresponden a la realidad de las decisiones populares?, pues en ese escenario sería posible que hasta los muertos votaran e incluso más de una vez.

Este proceso resulta débil ya que terceriza por un lado la responsabilidad de las mesas electorales, y con ello el registro, escrutinio y reporte de votos, en cabeza de ciudadanos medianamente capacitados y con posible intereses electorales; y por otro lado delega la posterior custodia de la información electoral en una fuerza pública poco independiente respecto del gobierno de turno o algún otro interés interno. Lo cual ante la ausencia de controles adecuados que permitan la debida auditoría, y el monitoreo de alertas respecto de posibilidades de fraude, nos pone como democracia en una situación delicada para argumentar la legitimidad del poder más allá del auto reconocimiento de los gobernantes. Ciertamente la solución más inteligente, eficiente y práctica es recurrir a la tecnología y pasarnos a la onda del voto electrónico para que incorpore avance importantes por un lado en término de reconocimiento de votantes, así como facilidad para el votante al momento de la elección con lo cual se contendría el fenómeno del voto nulo, pero sobretodo es esencial que se brinden garantías en la custodia, almacenamiento y procesamiento de la información electoral. Sin embargo mientras eso llega, lo mínimo es que podamos determinar procedimientos que blinden la información y al menos nos den alguna representatividad civil.

*Andres Felipe Ramos*